

## CONCLUSIONES

Desde el nacimiento de la figura jurídica de la fianza en el derecho romano, su fin ha sido el otorgar una garantía y seguridad a una persona llamada acreedor en relación con su deudor. Donde actualmente, la fianza se define un contrato por el cual una persona, llamada fiador (institución afianzadora) se compromete con el acreedor a pagar por el deudor (fiado), si éste no lo hace. La fianza como figura jurídica posee ciertas características tales como: ser un contrato accesorio, personal, con libertad de formalidades, etc. Es importante el haber distinguido a la fianza de diversas figuras afines como es la novación, la obligación solidaria, el aval, etc. La fianza en el Código Civil Federal se clasifica en: legal, judicial, convencional, gratuita, o a título oneroso; dentro de ésta última fianza, encontramos la llamada fianza mercantil, y que es el tema que nos ocupa, encontramos cuatro personas intervinientes que son: la institución afianzadora, tomador o contratante, el fiado o deudor principal y el beneficiario. Además de contar con un elemento material que la hace distinta a las demás que es la póliza, documento en el cual está la manifestación escrita del contrato de fianza.

A través de la fianza se pueden garantizar créditos fiscales, esta considerada como tal en nuestra legislación fiscal como una de las formas de garantía, y es utilizada por los contribuyentes para conseguir la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución llevado a cabo por parte de la autoridad fiscal. Al utilizar la expresión de garantía del interés fiscal debemos entender que el fisco tiene la certeza de que el importe del crédito fiscal va a ser liquidado evitándose que con posterioridad al fincamiento del crédito, el contribuyente se encuentre en un estado de insolvencia que impida el cobro del adeudo en perjuicio del interés del fisco. El artículo 141 del Código Fiscal de la Federación señala las diversas formas de garantizar el interés fiscal, siendo una de ellas la señalada en la fracción III, que es la fianza otorgada a favor de la Federación.

La fianza se constituye mediante contrato que celebra el deudor con una compañía de fianzas que cuente con la debida autorización para funcionar como tal. De acuerdo al artículo 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, dichas instituciones no gozan de los beneficios de orden y excusión. Dicha fianza para efectos fiscales, debe de cumplir con ciertas formalidades, como el otorgarse a favor de la Federación o del organismo fiscal descentralizado del cual se deba garantizar el interés fiscal.

De acuerdo al Código Fiscal de la Federación la facultad de hacer efectiva la póliza de fianza se ejerce por parte de la autoridad fiscal, cuando el crédito fiscal es legalmente exigible. La autoridad beneficiaria de dicha póliza de fianza podrá requerir el pago a la afianzadora, donde sino paga dentro del mes siguiente a la fecha en que surta efectos la notificación, la propia ejecutora ordenará a la autoridad competente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico que remate en bolsa, valores propiedad de la afianzadora para cubrir el importe requerido. Sin embargo, de acuerdo al artículo 95 fracción V de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, la compañía afianzadora después de ser requerida del pago de la póliza por parte del beneficiario (en este caso la autoridad fiscal), tiene la opción de interponer el juicio de nulidad en contra de dicho requerimiento de pago. Por lo tanto, es aquí el inicio de un largo procedimiento legal, donde se retarda el pago de dicha póliza de fianza por parte de la institución de fianzas, ya que la mayoría de los juicios de nulidad (que en mayoría tiene una duración de por lo menos un año y medio) se obtiene sentencia a favor de la autoridad fiscal beneficiaria de dicha póliza de fianza. Haciendo la manifestación que durante el tiempo que transcurrió por el juicio, la autoridad fiscal por causas no imputables a la misma, no pudo hacer uso de dicho ingreso, que legalmente era procedente desde que le fue requerido a la compañía afianzadora.

De lo señalado con anterioridad se desprende que existe una grave inconsistencia que desemboca en la ineficacia jurídica de la póliza de fianza otorgada a favor de la federación para garantizar obligaciones fiscales, en virtud de que no cumple con uno de los objetivos por los cuales fue otorgada en su inicio, que es el garantizar y tener una seguridad por parte de la Autoridad Fiscal respecto del pago total del crédito fiscal fincado al contribuyente. Lo anterior es por que la institución afianzadora al celebrar el contrato con el deudor (contribuyente) únicamente lo hace por un monto que en ese momento le fija la autoridad fiscal, monto que legalmente no es susceptible de ser actualizado por al transcurso del tiempo, obligándose la afianzadora únicamente hasta por el limite de lo garantizado, independientemente de lo que se tarde en pagar dicha fianza al beneficiario por causas imputables a la citada institución afianzadora, como es el hecho de retardar su pago a través de la interposición de medios de defensa (juicio de nulidad, juicio de amparo, etc.).

De lo anterior, podemos afirmar que, debe regularse eficazmente la póliza de fianza expedida para garantizar obligaciones fiscales, dando a la autoridad fiscal la seguridad que en caso de ser improcedentes los medios de defensa que haga valer en su momento la institución afianzadora, el pago de la póliza de fianza se haga con determinado factor de actualización de la misma, que de la posibilidad de que el transcurso del tiempo no le cause un perjuicio a la autoridad fiscal por la falta de pago oportuno de la póliza por causas imputables a la institución afianzadora, pudiendo ser dicho factor de actualización, el hecho de poderse expedir fianzas para efectos fiscales en Udi's o en dólares, para que el transcurso del tiempo no le afecte a la autoridad fiscal o que se puedan actualizar como si fueran créditos fiscales, es decir, en términos de lo señalado en los artículos 17 A y 21 del Código Fiscal de la Federación.